El siguiente es el documento presentado por la Magistrada Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Providencia: Sentencia – 1ª instancia – 6 de agosto de 2018

Proceso: Acción de Tutela

Radicación Nro. : 66001-22-13-000-2018-00562-00

Accionante: Augusto Becerra

Accionado: Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal

Magistrado Ponente: Claudia María Arcila Ríos

**Temas: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN POPULAR / RECHAZO POR COMPETENCIA Y REMISIÓN A OTRO DESPACHO / PENDIENTE DE RESOLVER / IMPROCEDENTE**

4. Las pruebas documentales allegadas en el proceso, acreditan que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por auto del 7 de mayo último, decidió rechazar, por falta de competencia, la acción popular radicada con el número 2018-00116, instaurada por el señor Augusto Becerra, y ordenó su remisión al reparto de los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá[[1]](#footnote-1).

5. Surge de lo anterior, que en este caso concreto no se satisfacen todos los presupuestos de procedencia de la acción de tutela a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita, concretamente el segundo.

En efecto, si los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a los que correspondan la acción popular remitida, no han adoptado aún alguna determinación, el amparo constitucional solicitado se tornaría prematuro, pues todavía estaría por definirse lo relativo a la competencia, en razón a que al recibir el expediente, tendrían la opción de asumirlas o, en caso contrario, generar el conflicto correspondiente, que dirimiría la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL**

**SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA**

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos

 Pereira, agosto seis (6) de dos mil dieciocho (2018)

 Acta No. 280 del 6 de agosto de 2018

 Expediente No. 66001-22-13-000-2018-00562-00

Se decide en primera instancia la acción de tutela de la referencia, promovida por el señor Augusto Becerra contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados la Alcaldía de esa localidad, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ambos de la Regional Risaralda.

**A N T E C E D E N T E S**

1. Relató el actor que en la acción popular radicada “2018-116”, que formuló contra el Banco BBVA, el juzgado accionado, en desconocimiento de las normas de orden público, decidió rechazar la demanda a pesar de que no es parte y que carece de facultad para declarar su falta de competencia. Además, “escogi (sic) el domicilio de la accionada en el municipio de Santa Rosa de Cabal… y es competente la tutelada para tramitar mi accion (sic)”.

2. Considera lesionado los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Para su protección, solicita se ordene al juzgado accionado admitir inmediatamente la demanda popular y consigne el número de radicado de todas las acciones populares en las cuales no ha declarado su falta de competencia.

**ACTUACIÓN PROCESAL**

1. Mediante proveído del 12 de julio último la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de requerir al actor para que subsanara la demanda, ordenó remitirla por competencia a este Tribunal ya que si bien se dirige contra la Sala de Casación Civil de aquella corporación, lo cierto es que la vulneración de los derechos

solo se atribuye a las decisiones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.

2. Por auto del 27 de julio esta Sala avocó el conocimiento de la acción de amparo y ordenó vincular a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, ambos de la Regional Risaralda. A ello no se procedió respecto de la entidad allí accionada, ya que la demanda popular fue rechazada por competencia y por tanto no ha comparecido a esa actuación.

3. Solamente se pronunció la titular del juzgado accionado. Informó que mediante providencia del 7 de mayo pasado, decidió rechazar la demanda popular formulada por el actor y ordenó remitirla al reparto de los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá, con sustento en que el domicilio principal de la entidad demandada se localiza en esa ciudad. Frente a esas decisiones, no se interpuso recurso alguno.

**C O N S I D E R A C I O N E S**

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.

2. El problema jurídico que debe resolver la Sala, es determinar si procede la acción de tutela contra la decisión por medio de la cual el juzgado accionado rechazó por competencia la acción popular objeto del amparo. De serlo se establecerá si en esa actuación se incurrió en la lesión de derechos fundamentales invocada.

3. La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa clase de decisiones.

Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales específicas, las siguientes:  “*(i) Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;(…) (iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (…) (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (…)*”[[2]](#footnote-2).

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales específicas de procedencia de la acción, las siguientes*: “7.1.- Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia. 7.2.- Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley. 7.3.- Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas que afectarían el sentido del fallo. 7.4.- Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible para el caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene. 7.5.- El error inducido: acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales. 7.6.- Decisión sin motivación: se presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan. 7.7.- Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad. 7.8.- Violación directa de la Constitución que se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa”[[3]](#footnote-3).*

4. Las pruebas documentales allegadas en el proceso, acreditan que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por auto del 7 de mayo último, decidió rechazar, por falta de competencia, la acción popular radicada con el número 2018-00116, instaurada por el señor Augusto Becerra, y ordenó su remisión al reparto de los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá[[4]](#footnote-4).

5. Surge de lo anterior, que en este caso concreto no se satisfacen todos los presupuestos de procedencia de la acción de tutela a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita, concretamente el segundo.

En efecto, si los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a los que correspondan la acción popular remitida, no han adoptado aún alguna determinación, el amparo constitucional solicitado se tornaría prematuro, pues todavía estaría por definirse lo relativo a la competencia, en razón a que al recibir el expediente, tendrían la opción de asumirlas o, en caso contrario, generar el conflicto correspondiente, que dirimiría la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el artículo 139 del Código General del Proceso que dice en lo pertinente: *“Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación…”*.

Por sabido se tiene que como mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales, la acción de amparo solo procede cuando de resultar vulnerados o amenazados, los medios previstos en el ordenamiento legal no resultan suficientes para garantizarlos. En consecuencia, no puede ser empleada de manera simultánea con los medios ordinarios previstos en la ley para la defensa de los derechos. Ello guarda relación con el segundo de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita, que como ya se indicara, no se satisface en el caso concreto.

Por tanto, la tutela resulta improcedente pues no puede ser empleada como mecanismo para decidir lo relacionado con la admisión de las acciones populares. Para ese efecto, primero es necesario agotar la vía judicial ordinaria en la que se defina la competencia territorial para conocer de esos procesos. En consecuencia, en la forma indicada se decidirá la cuestión.

6. Improcedente también resulta la petición del actor dirigida a que se ordene al juzgado accionado identificar todas las acciones populares en las cuales no ha declarado su falta de competencia, ya que la acción de amparo está concebida para proteger derechos fundamentales concretos y no para elevar esa clase de peticiones.

7. Tal como lo solicita el actor, envíese a su correo electrónico copia de la demanda y de esta providencia. Ello, a su costa, porque no existe circunstancia que lo exonere de ese pago.

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Augusto Becerra contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados la Alcaldía de esa localidad, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ambos de la Regional Risaralda.

**SEGUNDO.** Remítase al correo electrónico del accionante copia de la demanda y de este fallo, a su costa.

**TERCERO.** Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**CUARTO.** De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase,

Los Magistrados,

 **CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS**

 **DUBERNEY GRISALES HERRERA**

 **EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS**

 **(Ausente con causa justificada)**

1. Folio 7 y 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia T-307 de 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sentencia SU-241 de 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Folio 7 y 8 [↑](#footnote-ref-4)